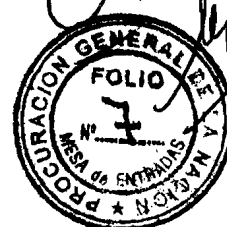


6

Procuración General de la Nación



Suprema Corte:

- I -

A fs. 1/2 la Dirección General Impositiva inició ejecución fiscal contra Vicente Cirilo y otros por deuda en concepto de aportes y contribuciones del Régimen Nacional de la Seguridad Social, determinada en actas de inspección e infracción, correspondientes a periodos comprendidos entre enero de 1992 y junio de 1995.

Los ejecutados opusieron la excepción de inhabilidad de título, basada en que las actas de inspección e infracción, labradas el 27 de diciembre de 1995 por inspectores de la DGI, están viciadas de nulidad por no haberse seguido el procedimiento establecido en los arts. 23 y ss. de la ley 11.683 (t.o. en 1978 y sus modificaciones). Paralelamente, alegaron que también se intenta ejecutar multas que no fueron aplicadas conforme al procedimiento que contempla la señalada ley. Por último, negaron la existencia de deuda, puesto que el 27 de noviembre de 1995 se acogieron al plan de facilidades de pago establecido por decreto 493/95, cuyas cuotas abonaron.

- II -

La actora reconoció, al contestar el traslado de la excepción, el acogimiento realizado al decreto 493/95, pero indicó que está referido a periodos independientes de los ajustados mediante las actas ahora ejecutadas (fs. 28/29).

- III -

La Señora Jueza Federal hizo lugar parcialmente a la excepción de inhabilidad de título (fs. 30/34). Para así decidir, tras determinar el plexo jurídico que consideró aplicable al caso, conformado por los arts. 10 y 11 de la ley 18.820 y sus reglamentaciones vigentes (dec. 507/93 y normas cc.), rechazó la oposición de la demandada fundada en la falta de aplicación del art. 23 de la ley 11.683 para la determinación de la deuda previsional,

declarando que dicha norma no es de rigor en el procedimiento de recaudación de los recursos de la Seguridad Social.

En cambio, entendió que resultaba procedente la objeción formulada respecto de la determinación de las multas, ya que el Fisco omitió aplicar los arts. 42, 42 bis, 43, 72 y cc. de la ley 11.683. No hizo lugar, por ende, a la ejecución en cuanto a éstas y, de igual manera, procedió con relación a los periodos comprendidos en el plan del decreto 493/95, es decir, desde diciembre de 1994 hasta junio de 1995, acogimiento cuya autenticidad fue reconocida por el organismo fiscal.

- IV -

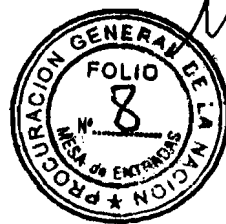
Disconforme, la ejecutante interpuso el recurso extraordinario obrante a fs. 37/44.

Sostuvo, en lo esencial, que la sentencia tiene carácter definitivo, conforme al art. 92 de la ley 11.683, que determina su inapelabilidad en las instancias ordinarias. Alegó que la temporánea percepción de los recursos fiscales configura un supuesto de gravedad institucional, lo que habilita el recurso extraordinario aún en ausencia de alguno de sus extremos.

Fundó el recurso en la arbitrariedad de la sentencia porque decidió sobre cuestiones de fondo en un juicio ejecutivo (el análisis de la causa de la multa impuesta) y equivocó, además, el encuadre legal, dado que no se trata de una multa originada en la omisión de presentar declaraciones juradas (reprimida por los arts. 42 bis y 43 de la ley 11.683, t.o. en 1978 y sus modificaciones, aplicable a la materia previsional en virtud de los arts. 25 y 26 del dec. 507/93), sino en la falta de denuncia de trabajadores y/o el incumplimiento de retenciones de los aportes, supuestos que no se rigen por la citada ley 11.683, sino por la ley 17.250 y normas concordantes.

Expresó también que el decisorio exhibe contradicciones internas, puesto que, si bien la ejecución prosperó respecto de las actas determinativas de deuda, fue rechazada en cuanto a las actas de infracción, pese a que éstas constituyen anexos que dependen directamente de aquéllas.

Procuración General de la Nación



- V -

Aunque los pronunciamientos recaídos en juicios ejecutivos no revisten, en principio, el carácter de sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, estimo que corresponde reconocerle tal naturaleza al dictado en el sub-lite, toda vez que hizo lugar en forma parcial a la excepción de inhabilidad de título, fundada en el incumplimiento de los pasos procedimentales aptos para imponer la sanción cuyo cobro compulsivo se trata. Ello es así, pues los argumentos del a quo y lo decidido por él respecto del procedimiento observado para el libramiento de la boleta de deuda no podría ser objeto de replanteo posterior, a la vez que produce un menoscabo a los derechos constitucionales invocados por el recurrente (conf. Fallos: 308:1744; 312:2140).

- VI -

En cuanto al fondo del asunto, debe tenerse presente que el título ejecutivo contempla la deuda previsional resultante de actas labradas a través del procedimiento reglado por los arts. 10 a 18 de la ley 18.820 y las sanciones respectivas, con fundamento en el art. 15 y concordantes de la ley 17.250, reglamentados en lo pertinente por el decreto 507/93 y sus modificaciones.

Resulta preciso indicar que, al haberse constatado mediante dichas actas la falta de denuncia de personal en relación de dependencia, como asimismo el incumplimiento de realizar retenciones de aportes sobre la nómina salarial, se encuentra configurada la conducta prevista por la ley 17.250, en su art. 15, inc. 1º, ap. b).

Entiendo que, si bien es correcta la descripción normativa realizada por la juzgadora (considerandos 4º y 5º), en cuanto al traspaso de funciones referidas a la verificación y recaudación de los tributos de la seguridad social desde la ANSeS a la DGI, es erróneo lo afirmado por aquélla en tanto sostiene que las infracciones cuya sanción pecuniaria se ejecuta hallarían su fuente en normas de la ley 11.683, ajenas en este punto a las actas de marras.

En efecto, es mi parecer que éstas no tienen fundamento en los arts. 25 y 26 del Decreto 507/93, que prevén la aplicación de las sanciones que se establecen en los arts.

42 bis y 43 de la ley 11.683 para los casos de omisión de presentación de declaraciones juradas y de omisión de contestación de requerimientos formulados, sino en las normas contenidas en el citado art. 15, inc. 1º, ap. b) de la ley 17.250.

La DGI, sobre la base en las facultades conferidas por el art. 7º de la ley 11.683 -entonces vigente- y por el art. 6º del decreto 507/93, dictó la resolución general 3.756, cuyo art. 2º, punto 1, apartado 1.4, prevé el monto de la multa correspondiente a la falta de denuncia de trabajadores y/o incumplimiento de las retenciones de aportes que resulten procedentes, conf. art. 15, inc. 1º, ap. b) de la ley 17.250, en el doble del importe de los aportes y contribuciones que hubiera correspondido liquidar respecto de los trabajadores involucrados.

Es por lo expuesto que resultan también incorrectas las afirmaciones contenidas en la sentencia apelada, relativas a la inhabilidad de título por falta de sumario previo, como asimismo por haberse excedido los montos previstos por los arts. 42 bis y 43 de la ley 11.683, normas ajenas a la causa.

Considero oportuno señalar, además, que, conforme lo aclaró la misma resolución general antes referida, en su art. 4º, la aplicación de las multas no obsta a la procedencia de los intereses resarcitorios y de las sanciones previstas en los arts. 25 y 26 del dec. 507/93.

Por otra parte, el ejecutado no alegó ni, por ende, intentó demostrar que haya hecho uso del derecho a impugnar la determinación previsional realizada por los inspectores, mediante el procedimiento del art. 11 in fine de la ley 18.820 y su reglamentación (res. 877/92 de la ANSeS), con lo cual, al no haber discutido dicha deuda en la instancia administrativa correspondiente, ni procedido al pago de ella en el plazo establecido, ni tampoco con posterioridad, estimo que resulta procedente la ejecución.

- VII -

Cabe advertir, sin embargo, que la ejecutada adhirió -con anterioridad al labrado de las actas ahora ejecutadas- al plan propuesto por el decreto 493/95, abonando en cuotas sumas imputadas a los períodos 12/94 a 6/95, ambos inclusive.

Procuración General de la Nación



Por ello y, en consonancia con los términos de la mentada norma reglamentaria, estimo que, al momento de realizar la liquidación de la deuda ejecutada en autos, deberán tomarse en consideración las sumas efectivamente pagadas, tanto respecto de la deuda provisional, como asimismo sus consecuencias en relación a la condonación de sanciones (conf. art. 1º del citado decreto).

- VIII -

Opino, por lo tanto, que corresponde dejar sin efecto la sentencia de fs. 30/84 en cuanto fue materia del recurso federal intentado y tener presente la salvedad expuesta en el acápite precedente.

Buenos Aires, 7 de febrero de 1999.-

ES COPIA

NICOLAS EDUARDO BECERRA

CAROLINA OLIVA FAURELDINES
PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

8-9-98